

Luis Beccaria

EMPLEO E INTEGRACIÓN SOCIAL

Introducción

Si bien no todo tiempo pasado fue mejor, existe un amplio consenso en caracterizar a la Argentina de mediados de los años setenta como una sociedad que gozaba de niveles de bienestar relativamente adecuados y de un elevado grado de integración —especialmente en el contexto latinoamericano—. La proporción de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza era reducida y las expectativas de movilidad social ascendente resultaban generalizadas. Este panorama comienza a alterarse en aquel momento, cuando se inaugura un período —que se extiende hasta el presente— que, más allá de los frecuentes vaivenes, se distingue por el persistente deterioro social. En los umbrales del siglo XXI, la sociedad argentina transita, entonces, un proceso de creciente desintegración social que consolida la situación de pobreza —o de extrema vulnerabilidad— de amplios sectores y agudiza las diferencias entre los estilos de vida de los más pobres y de los más ricos. Una sociedad en la que, por sobre todo, sus miembros han perdido aquella perspectiva respecto del ascenso social; así, en muchos hogares se extiende la desesperanza al constatar que los hijos no lograrán mejorar el nivel de vida que alcanzaron sus padres.

Esta modificación en el grado de integración social y en el nivel y distribución del bienestar registrada en los últimos veinticinco años está estrechamente ligada al marcado deterioro que viene experimentando la capacidad de la economía de generar empleos, especialmente en lo que atañe a ocupaciones estables y con salarios adecuados. En efecto, en las sociedades modernas el trabajo constituye la principal —y en casi todos los casos, la única— fuente de recursos

para la inmensa mayoría de los hogares. De esta manera, los gastos destinados a la producción y a la reproducción familiar se afrontan fundamentalmente con los sueldos y salarios que sus miembros reciben por trabajar en relación de dependencia o, en menor medida, con los ingresos que pueden obtener al desarrollar actividades por cuenta propia.

Por lo tanto, la imposibilidad de conseguir un empleo, especialmente después de haber sido despedido, constituye un hecho de suma gravedad ya que afecta la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de los hogares al significar la pérdida de un —o del único— ingreso con el cual se financiaba la adquisición de bienes y servicios.

Pero el trabajo es más que una fuente de recursos económicos: constituye el ámbito de socialización por excelencia de las personas, el que organiza su cotidianeidad y la de sus hogares, y les garantiza un lugar en esta sociedad. Consecuentemente, aquellos miembros proveedores típicos de ingresos del hogar ven lesionadas seriamente sus posibilidades de establecer sólidos lazos sociales cuando no están empleados. Este mismo hecho es una fuente potencial de disrupción de la vida familiar ya que precisamente esos individuos pueden sumirse en una fuerte depresión al no poder continuar asumiendo el papel de proveedores, generando o exacerbando conflictos en el ámbito del hogar.

El desempleo no constituye, sin embargo, la única causa de las dificultades que se enfrentan para alcanzar los recursos materiales necesarios, ni de aquellas que debilitan la integración social de los individuos. Las bajas remuneraciones suelen ser otra fuente de tensiones en la vida familiar. Las personas pueden también trabajar en condiciones que resultan insatisfactorias para su bienestar y el de sus familias. Esto último sucede con los empleos usualmente denominados precarios —como muchas ocupaciones por cuenta propia o los trabajos asalariados que el empleador no registra en la seguridad social, a los que a veces se denomina “empleos no registrados” o “en negro”— ya que, por un lado, ellos no proveen cobertura frente a situaciones tales como enfermedades (de los trabajadores o de sus

familiares) u otros eventos que puedan afectar la capacidad para el desarrollo de la tarea. Precisamente, en las sociedades modernas el trabajo asalariado constituye el medio de acceso por excelencia a mecanismos de seguridad social que procuran aislar a sus miembros de los principales efectos de contingencias como éstas. Por otro lado, esos puestos precarios suelen ser de naturaleza temporaria, lo cual provoca una inestabilidad laboral que se traduce en una variabilidad de los ingresos de los hogares. Cuando la presencia de este tipo de ocupaciones se hace más frecuente, aumenta la cantidad de hogares en los que el flujo de recursos se torna imprevisible, dificultando seriamente la elaboración de los planes más elementales y elevando el grado de incertidumbre respecto del futuro, aun del más inmediato. Las trayectorias ocupacionales inestables, asociadas a la existencia de una importante cantidad de puestos precarios, también conspiran contra la integración social al limitar las posibilidades de consolidar las relaciones sociales en el ámbito laboral.

Frente al desempleo, los bajos ingresos o la precariedad, los hogares desarrollan estrategias tendientes a aumentar o a estabilizar los ingresos. Ellas se traducen en la extensión de la jornada laboral de quienes ya están ocupados (esto es, conseguir otro empleo o realizar horas extras) o bien en la búsqueda de un trabajo remunerado por parte de miembros que se dedicaban a tareas domésticas o al estudio. Estas estrategias no dejan de generar dificultades, que van más allá de la merma de la salud que puedan experimentar quienes realizan jornadas prolongadas. En ocasiones, desorganizan la vida familiar, aspecto de alguna manera ya señalado anteriormente, en tanto alteran los roles de los diferentes miembros y desembocan en la pérdida de autoestima. Estos cambios de roles también afectan, en ciertas ocasiones, la calidad del cuidado de los niños más pequeños y aumentan la probabilidad de abandono escolar por parte de los miembros jóvenes.

Los citados problemas laborales –desocupación, precariedad, inestabilidad laboral– así como los bajos salarios, suelen tener mayor incidencia y ser más persistentes entre determinados grupos de trabajadores y, por lo tanto, de sus familias. Consecuentemente, cuan-

do las dificultades ocupacionales se prolongan y agudizan, también se desarrollan y profundizan los procesos de desintegración social. Las brechas entre los niveles de bienestar correspondientes a distintos grupos de hogares —grupos definidos, básicamente, por el nivel de calificación de los miembros activos— se amplían como consecuencia de la mayor distancia que entre ellos existe en términos de los ingresos monetarios, de la estabilidad de dichos ingresos y del acceso a la seguridad social. Quienes se ven más perjudicados no sólo obtienen recursos comparativamente menores a los de aquellos que cuentan con una mejor inserción en el mercado de trabajo, sino que muchas veces no alcanzan el mínimo necesario para satisfacer las necesidades elementales. Ellos también perciben cómo se debilitan sus lazos sociales dando lugar, en los casos más extremos, a situaciones caracterizadas como de exclusión social.

El desempleo, el deterioro de la calidad de las ocupaciones —debido al incremento de la proporción de puestos precarios— y la disminución salarial han caracterizado a la Argentina de estos últimos veinticinco años. Si bien a lo largo del período que se extendió entre la posguerra y mediados de los setenta existían problemas de empleo en el país, ellos se registraban en una magnitud limitada.

Pero la cantidad y calidad de las ocupaciones, así como el nivel de los ingresos, resultan, a su vez, asociados a la situación económica del país: a la evolución de la producción total y a otros fenómenos como la inflación. Precisamente, el acelerado crecimiento de los precios o la limitada y fluctuante capacidad de generar divisas que exhibía la economía encabezaban la lista de las preocupaciones de la población y de los gobiernos argentinos de mediados de los setenta. Ellas eran, para algunos, signos del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones vigente desde la inmediata posguerra. Por hacer frente a estas dificultades, se implementaron políticas de ajuste que, entre otras cosas, incluían medidas tales como devaluaciones, control de salarios o reducción del gasto público. Tales ajustes agudizaron las dificultades ocupacionales y/o redujeron la capacidad de compra de los salarios —esto es, los salarios reales—, especialmente para determinados grupos de

trabajadores. Se inició allí una lenta, traumática y contradictoria transformación del orden económico y del estilo de desarrollo, uno de los factores relevantes que permiten entender los ya mencionados profundos cambios en los aspectos ocupacionales y, consecuentemente, en la estructura social en dirección a una más desintegrada a partir de la agudización de heterogeneidades existentes y de la creación de otras. Esa transformación también abarcó al papel del Estado y de las instituciones que influyen sobre los niveles y distribuciones de los ingresos y las ocupaciones.

Los estados aplican muchas veces mecanismos que intentan atender ciertas dificultades generadas tanto por la falta de empleo como por los bajos salarios —algunas de las cuales ya fueron indicadas—. Muchos países cuentan, por ejemplo, con seguros de desempleo que permiten, a quienes han sido despedidos, recibir ingresos durante el episodio de desocupación (o durante parte del mismo). También son frecuentes los salarios mínimos, que imponen un piso a las remuneraciones que deben pagar los empleadores. Sin embargo, sólo los asalariados y, más precisamente, aquellos que se desempeñan o desempeñaron en puestos registrados en la seguridad social, pueden obtener tales beneficios. Por lo tanto, su efectividad es limitada en casos como el de la Argentina, donde se ha extendido el empleo en negro.

Pero también existen prestaciones estatales no ligadas a la condición de asalariado registrado: acceso gratuito a bienes básicos, como la salud y la educación, o programas sociales específicos —como los alimentarios— de atención a aquellos sectores de la población que perciben ingresos insuficientes del mercado de trabajo. Sin embargo, ellos parecen estar, en el mejor de los casos —y cuando funcionan adecuadamente—, destinados a solucionar situaciones extremas y crónicas de modo tal de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas a quienes se encuentran en las peores condiciones. No resulta posible, aunque a veces se argumenta en este sentido, hacer recaer sobre las espaldas de la política social el objetivo de poner fin a los problemas de empleo generalizados y persistentes. Si bien ella procura aliviar la difícil situación de algunos hogares cuyos

miembros no se incorporan al mercado de trabajo, o lo hacen de manera precaria o inestable, la atención será necesariamente parcial. Por de pronto, si algún apoyo material resulta posible, continúa subsistiendo una limitada sociabilidad consecuencia de la desocupación y de la intermitencia laboral.

La Argentina es un buen ejemplo de esta limitación de la política social para atender las dificultades ocupacionales exclusivamente con medidas asistencialistas, propuesta que prevalece en algunos círculos. Esos límites no sólo derivan del siempre insuficiente volumen de recursos que se destinan a tales acciones, sino del efecto de muchas de ellas. Cabe destacar, en este sentido, que la provisión de servicios de baja calidad a la población de menores recursos ha reforzado la segmentación social. A ello debe agregarse el proceso de continuo deterioro de las prestaciones de tipo universal —básicamente, salud y educación, a lo que cabe agregar previsión social—, consecuencia también de la insuficiencia de recursos que se deriva de la persistencia de los problemas fiscales; precisamente, la dificultad para eliminar la brecha negativa entre los ingresos públicos (provenientes fundamentalmente de los impuestos) y los gastos públicos es uno de los rasgos típicos de los conflictos económicos que viene atravesando el país.

La discusión anterior buscó enfatizar la relevancia de las relaciones existentes entre la situación social, el mercado de trabajo, el comportamiento de la economía y las políticas económicas y sociales. En especial, se argumentó que los desarrollos en el mercado laboral resultan cruciales para comprender lo que aconteció con la situación social en la Argentina. Teniendo en cuenta esta premisa, en el presente libro se analizarán los rasgos más salientes del comportamiento del empleo y las remuneraciones durante los últimos veinticinco años, con el objetivo de discutir la conexión entre ellos y el proceso de deterioro de la situación social. El mercado de trabajo se analizará en el contexto de la evolución de la economía y de las políticas económicas pues, como ya se señaló, los movimientos que aquél experimenta están influenciados por la dinámica económica más general.

La presentación de los temas está organizada de la siguiente manera: en el capítulo 1 se estudiarán los desarrollos producidos en el mercado laboral urbano argentino desde mediados de los setenta hasta fines de los noventa, con especial énfasis en lo acontecido durante esta última década. Un conjunto de los efectos sociales que parecen desprenderse del empeoramiento de la situación del empleo se analizará en el capítulo siguiente. El trabajo concluye en el capítulo 3 con un recorrido por diversos escenarios que pueden elaborarse respecto de eventuales comportamientos que tendría el mercado de trabajo, así como de otros rasgos de la realidad social, en un futuro mediato. Ello posibilitará reflexionar acerca del tipo de las opciones planteadas a la acción del Estado.